



México, Distrito Federal. Acuerdo de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del día trece de marzo de mil novecientos cuarenta y cuatro.

En el amparo directo número ocho mil ciento-- cincuenta, de mil novecientos cuarenta y uno, Segunda Oficialía Mayor:

1.- El presente amparo fue promovido por Javier Belmont en escrito de fecha ^{veinte} nueve de octubre de mil novecientos cuarenta y uno.

2.- El quejoso reclama contra sentencia definitiva de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios Federales, de fecha veintitrés de ^{septiembre} septiembre de mil novecientos cuarenta y uno.

3.- Emana ese acto de la apelación interpuesta por el actor contra sentencia definitiva, pronunciada por el Primer Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de lo Civil, en funciones de Juez por ministerio de ley.

4.- El juicio de que proceden ambas resoluciones se inició por demanda ordinaria civil de fecha veintitrés de noviembre de mil novecientos treinta y ocho, entablada por Javier Belmont ante el Juez Primero de lo Civil, frente al albacea de la sucesión de bienes de Domingo Belmont.

5.- El actor demandó la declaración de que-- había adquirido por prescripción los predios que en seguida se mencionan, con la superficie y los linderos que la demanda expresa: Reyesmilla, Tlancastitla, Nicostitla, Los Tejocotes y Tlaltelco, todos cinco --

ubicados en la antigua Municipalidad de Coyocacán, del antiguo Distrito de Tlalpan, Distrito Federal.

6.- Los bienes están inscritos en el Registro Público de la Propiedad a nombre del autor de la Sucesión demandada.

7.- El pretensor fundó como sigue, en síntesis, su demanda ordinaria civil:

(I) Su padre, Domingo Belmont, para compensarlo de anteriores servicios, desde el año de mil -- novecientos once le donó a título oneroso los predios de referencia;

(II) Por consiguiente, el actor hace más de veinte años que disfruta en concepto de propietario -- de la posesión pacífica, continua y pública de los -- mismos bienes y los ha sembrado y cultivado en provecho propio, sin oposición ni molestia, desde el año -- de mil novecientos once;

(III) El autor de la sucesión murió el día -- seis de febrero de mil novecientos treinta y seis;

(IV) El albacea de la misma sucesión, que -- lleva más de un año de ejercer el cargo, no ha interrumpido al actor en la posesión de que disfruta.

(V) Como premisas de derecho material se -- citan en la demanda los artículos 1151, 1152, 1156 y -- 1157 del Código Civil en vigencia.

8.- La sucesión demandada negó los puntos -- de hecho (I) y (II) de la reseña que antecede y opuso además "la excepción de falta de acción que descansa -- en la cosa juzgada." En vía de réplica negó que Ja---




46

vier Belmont poseyera los bienes "en sentido jurídico" y le atribuyó al mismo "el carácter de simple detentador", para quien sería imposible probar la donación a título oneroso en que toma origen, según afirma el actor, la posesión de los bienes involucrados. Posteriormente, alegó el albacea de la sucesión que Javier Belmont "no ha podido poseer en nombre propio y con ánimo de prescribir lo que fue ^{es} de su padre, habiendo sido tutor del mismo en su interdicción, de la que no salió antes de morir, y heredero reconocido en la sucesión del mismo."

9.- Las partes rindieron prueba, corriendo la dilación. Ya fenecida, el albacea de la sucesión demandada, "con el carácter de prueba cuya existencia desconocía", ofreció la documental consistente en diversas constancias del juicio de interdicción a que fue sometido el autor de la herencia. El Juez, proveyendo conforme a tal promoción, libró oficio al Pupilar foráneo de Coyoteacán, Distrito Federal, para que remitiera la copia de referencia y, recibida, la mandó agregar a los autos (fojas 5, 6, 9 vuelta y 10, -- Cuaderno de pruebas del demandado.)

10.- El día tres de mayo de mil novecientos cuarenta se citó para sentencia: el auto fue proveído por el Juez Primero de lo Civil y surtió efectos mediante publicación en el Boletín Judicial. Sin más actuaciones, el día cuatro de octubre de mil novecientos cuarenta recayó sentencia definitiva, desfavorable para la pretensión actora.



11.- Declárase, en dicha sentencia, no proba da la acción: La prueba testimonial no fue suficiente para establecer que el padre hubiera donado al hijo, a título oneroso, los predios que el último ha poseído, sin discusión posible, a contar del año de mil novecientos once, mas sin establecer que hubiera adquirido la posesión de dichos inmuebles "a título de dueño"; esto es, por un medio legal traslativo de dominio." El actor afirma que su padre se los donó el año de mil novecientos once y no ha probado la donación. Las declaraciones de los testigos, sobre este punto, no merecen fe, porque "ni presenciaron el acto ni concurren al contrato de donación, y por lo tanto no dan fundada razón de su dicho." Por otra parte la donación de inmuebles es un contrato formal y es válido solamente cuando se hace constar en escritura pública: La donación que invoca el actor en el punto segundo de los hechos de su libelo no está probada "en manera alguna". Si el demandante reconoce que los predios eran propiedad del padre y de autos consta que el último llegó a hallarse en estado de interdicción y que la tutela fue ejercida por el primero, a éste no puede considerársele poseedor y prescribiente en contra del incapacitado. Por faltar el primer requisito de la prescripción, el actor no ha podido ganarla. En su consecuencia, amén de otros razonamientos, la sucesión de Domingo Belmont fue absuelta de la demanda. No se hizo condena especial en costas.



-3-

12.- El actor apeló para ante la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios Federal, e hizo valer tres agravios. Los dos últimos atañen al fondo y se hace mérito de ellos en subsiguiente apartado (número 24). El primero recae sobre la infracción del artículo 115 del Código de Procedimientos Civiles.

13.- Expresó el apelante, bajo este capítulo, que "en el caso se trata de un juicio ordinario y escrito". Luego, "debió notificarse el cambio de personal" y como no se notificó, es evidente que fue violada aquella ley del procedimiento. Hasta el día en que recayó sentencia, a contar de la fecha en que el Juez titular dictó auto citando para oírlo, transcurrió un período que pasa de cuatro meses y el Primer Secretario de Acuerdos (afirmase en el escrito de agravios) se pronunció "precisamente el día siguiente" al de la fecha en que entró en funciones de Juez por ministerio de ley.

14.- La Sala de apelación desechó los agravios y dictó la sentencia que se reclama, confirmatoria de la recaída en primer instancia, sin condenar en costas.

15.- Con relación al primer agravio estima la Sala sentenciadora: "Este agravio es infundado por que el artículo 115 del Código de Procedimientos Civiles ordena que se haga saber el cambio de personal -- cuando el negocio está pendiente únicamente de senten

cia y el juicio fuese ordinario y escrito, pero como de autos aparece que el que dictó la sentencia fue el Secretario de Acuerdos en funciones de Juez por Ministerio de Ley, no puede hablarse de cambio de personal y en esa virtud no era el caso de hacerse saber dicho cambio."

16.- También desechó el Tribunal responsable los agravios que el apelante enderezó, por cuanto al fondo, contra la resolución de primera instancia.

17.- La autoridad responsable, al rendir informe, confiesa el acto que se reclama, y en vía de justificación remitió los autos originales de primera y segunda instancias.

18.- La Presidencia de esta Suprema Corte admitió la demanda de amparo y mandó pasar los autos al Ministerio Público, en acuerdo proveído el día --- dieciséis de febrero de mil novecientos cuarenta y -- uno. A instancia de parte se acordó que el presente juicio y el amparo en revisión número cinco mil setenta del año de mil novecientos cuarenta y uno, Segunda Oficialía Mayor, se vieran juntos bajo ponencia del -- Ministro a quien correspondió el conocimiento del más antiguo.

19.- VIOLACION A LA LEY DEL PROCEDIMIENTO.

En la demanda de garantías por dos capítulos se impugna la ejecutoria de veintitrés de septiembre de mil novecientos cuarenta y uno. El quejoso revive, primeramente, prestándole forma de concepto de violación, el agravio que dedujo en segunda instancia



-4-

por infracción del artículo 115 del Código de Procedimientos Civiles. Como garantías violadas reclama las de los artículos 14 y 16 constitucionales.

20.- El Ministerio Público Federal, oído en este negocio, reputa inconsistente el primer concepto de violación. A su juicio, "el cambio operado a virtud de falta de Juez Titular y sustitución consiguiente del Primer Secretario de Acuerdos no implica cambio de personal." desde el ángulo del artículo 115 de la ley del procedimiento. La finalidad del precepto es que las partes puedan recusar "al Juez nuevo..." El Secretario, "como tal", pudo ser recusado oportunamente; mas si no lo fue "como Secretario," claro es que la parte "tampoco pudo haber tenido derecho para recusarlo como Juez." Son los mismos, con respecto a ambos funcionarios, los motivos de recusación y de impedimen

21.- Los autos establecen con eficacia de prueba plena que el actor propuso su demanda ante el Juez Primero de lo Civil; que el propio funcionario conoció del negocio hasta dictar auto en que se manda citar a las partes para sentencia, y que la misma fue pronunciada por el Primer Secretario de Acuerdos en funciones de Juez por legal ministerio. Entre ambas resoluciones no se produjo actuación ninguna ni se hizo por tanto saber el cambio sobrevenido en el personal del Juzgado. Concluido como estaba el estado de conocimiento, el actor hallábase en la imposibilidad de reclamar contra aquella omisión ante el Tribu-

nal de primera instancia; pero intentó contra la sentencia el recurso que procedía y al sustanciarse la apelación la hizo valer por vía de agravio sin obtener la debida reparación. En apartado anterior se transcriben los motivos que tuvo la responsable para desestimar el agravio correspondiente (número 15).

22.- En proyecto a que se dió lectura en acuerdo de esta Tercera Sala el día treinta y uno de agosto de mil novecientos cuarenta y tres, fue consultada la concesión del amparo, por violación a la Ley del Procedimiento, cometida en la secuela del juicio. Estimó el relator, en efecto, que el artículo 115 del Código Procesal prevé una situación objetiva, cuya realización en la especie es cognoscible directamente. Siendo ordinario y escrito el juicio en que el hecho se produjo, y pendiente únicamente de la sentencia, para el ejercicio de la suprema potestad jurisdiccional, la persona del Juez vino a ser reemplazada por la persona del Secretario. Por tanto, a la inversa de lo que siente la Sala responsable, "era el caso de hacerse saber dicho cambio", a menos de no conformarse el procedimiento al texto legal en cita.

23.- Mas en sesión celebrada el día dos de septiembre del año próximo anterior, esta Sala tuvo a bien resolver, por mayoría de cuatro votos, que debe tenerse por infundado el concepto en que se hizo valer la violación cometida al sustanciarse el procedimiento, toda vez que la omisión en hacer saber a la parte el cambio de personal, aun cuando le hubiera



-5-

privado de oportunidad para ejercitar el derecho de recusación, en realidad no importa violación que la deje sin defensa, afectando parte sustancial del procedimiento. En consecuencia, procedía formular nuevo proyecto, en el que fueran examinados los conceptos de violación deducidos en cuanto al fondo.

24.- AGRAVIOS DEDUCIDOS (POR CUANTO AL FONDO)

EN LA APELACION.

El actor, alzándose del pronunciamiento que le fue adverso, combate los fundamentos que, en síntesis, se dejan reproducidos en el apartado número 11 de la presente ejecutoria. En cuanto al fondo, conceptúase agraviado por violación de los artículos 826, 1151-I y 1152-I-III del Código Civil. Entiende que la posesión necesaria para prescribir debe ser en concepto de propietario y que, para el Juez recurrido, tal concepto importa un título perfecto, exigencia absurda, ya que a nadie podría ocurrirle demandar la prescripción positiva de un inmueble, si tiene la posesión del mismo como consecuencia de un título que le traspasó el dominio. Los tribunales han establecido, contrariamente a parecida tesis, que por justo título debe entenderse "cualquiera que tuviere esa apariencia." El término título, según ejecutoria de la Suprema Corte, se emplea en el sentido de causa o motivo de la posesión o precripción, "o sea el acto jurídico de donde la primera dimana." Jurisprudencialmente, se sustenta hoy, en resumen, la misma tesis y es por consiguiente absurda la interpretación que el

Juez de los autos prestó a los artículos 826 y -----
1151-I del Código Civil en vigencia.

25.- Desarrollando su agravio el apelante -
hizo valer el cambio que ha padecido con respecto al
Código de 1884, la Legislación vigente. Por aquel Or-
denamiento, la posesión, como medio para adquirir la
propiedad "debía ser fundada en justo título" y por -
tal reputaba al título "que es o fundamente se cree -
bastante para transferir el dominio." Menos exigente-
que el anterior es el nuevo Código, porque "sólo exi-
ge que se posea en concepto de propietario." Esta ex-
presión significa, según recientes ejecutorias, sola-
mente "el ánimo, el propósito" de disfrutar de la co-
sa como si fuera propia. La ley no exige un título --
perfecto de dominio sobre el inmueble cuya usucapión-
se reclama. Si el poseedor demuestra que realmente --
ha procedido como dueño, basta que su posesión sea --
"hábil para prescribir." Y si es cierto que el infe-
rior reconoce la eficacia de la prueba testimonial --
para tener por establecido que la posesión fue conti-
nua, pública y pacífica, debió también dar por acre-
ditados los requisitos del artículo 1151, en su frac-
ción I. No haciéndolo, infringió los preceptos que se
dejan señalados.

26.- Refiérese el apelante, al finalizar la enu-
meración de este agravio, al mérito de la prueba cons-
tituida por las declaraciones de Cándido Belmont y Ma-
nuel Ortega Rocha, que declararon en forma expresa --
y categórica, que Domingo Belmont "había cedido o do-



nado los terrenos" al reclamante, tanto como Hermenegildo Bolaños Alba y Francisco Hernández declararon "en el mismo sentido, aunque en forma menos precisa." A este particular, no cita el recurrente, en su escrito de expresión de agravios, los preceptos reguladores de la prueba que hubieren sido infringidos ni desvirtúa la prudente evaluación que hizo el Juez, -- por lo que a la testimonial se refiere; y expresa que aun estimando de mala fe la posesión que dejó acreditada, se habría consumado en la especie la prescripción, supuesto que data de más de veinte años atrás. En este lugar invoca, como infringidos, los artículos 826 y 1151. Cita igualmente la fracción III del artículo 1152 del Código Civil, al igual que los anteriores.

27.- Como final agravio se invocó ante la Sala sentenciadora la infracción de los artículos --- 793, 827 y 1139 del Código Civil, en que la sentencia se funda en parte. No consta de autos, según se expresa al dar forma a este agravio, que Javier Belmont -- haya retenido en provecho de su padre ni en cumplimiento de las órdenes o instrucciones de él recibidas, los predios que afirma haber poseído siempre en nombre propio y para su personal provecho, toda vez que, habiéndolos poseído en concepto de dueño desde un -- principio, ha de presumirse que siguió disfrutando de la posesión con el mismo carácter. La causa de ella -- no llegó a cambiarse, porque siempre disfrutó de los predios en propio nombre, hasta la fecha. Y si bien--

es cierto que fue tutor de su padre, poseyó los terrenos en concepto de propietario y la tutoría empezó -- a ejercitarla cuando estaba consumada la prescrip---- ción.

28.- El Tribunal de segunda instancia desesti mó los agravios de fondo por las consideraciones que, sintetizándolas, en seguida se reproducen, a saber:

29.- El inferior tiene por no fundada la --- acción, en manera alguna, porque no se probó el acto jurídico en que hubiere tomado origen, con arreglo -- a los hechos fundatorios de la demanda.- Por este --- motivo fue absolutorio el pronunciamiento de primer -- grado. Es correcta la conclusión a que se llega el -- Juez de primera instancia y no contradice el criterio que, sobre el particular, ha sustentado la Suprema -- Corte de Justicia de la Nación. Mantiene el Alto Tribunal que, según exige la ley, la posesión necesaria para prescribir ha de ser en concepto de propietario; pero no debe entenderse por ello que la posesión se -- adquiere mediante un título perfecto. Esta condición se llena cuando el demandante justifica que ha tenido la posesión en virtud "de un título que baste para -- transferir el dominio o que fundadamente se considera bastante para ese objeto". Ahora bien, el actor afirma que entró en la posesión por un título suficiente: la dación onerosa que a favor de él hizo Domingo Belmont, su padre. Estaba por tanto obligado a justificar en autos la existencia de ese contrato, para concluir que se había satisfecho "la primera condición que la-

51



-7-

ley señala, para poder adquirir por prescripción;" y como la única prueba que rindió el apelante fue la testimonial cuya estimación queda al prudente arbitrio del inferior, la sentencia recurrida no causa el agravio que se examina, "al declarar que no se comprobó el primer requisito" de la usucapión. Por lo demás, el Juez de la razón en que se funda para desestimar, con respecto a dicho elemento, la prueba testimonial.

30.- El Tribunal sentenciador considera que no es necesario examinar el último de los agravios de apelación, en el cual se citan los artículos 793, 827 y 1139 del Código Civil como inexactamente aplicados por el inferior, toda vez que no consta en autos, según afirma el apelante, que éste haya retenido los inmuebles en provecho de su padre o en cumplimiento de las órdenes de él recibidas; sino que los poseyó siempre a su nombre y los explotó en su provecho; y habiéndolos poseído en concepto de dueño desde un principio, debió presumirse que la posesión la ha seguido disfrutando con el mismo carácter, ya que no llegó a mudarse la causa de la misma. La autoridad responsable siente que, aun cuando se estimara fundado este agravio, no bastaría la demostración del mismo para modificar ni revocar la sentencia recurrida, tomando en cuenta la conclusión a que se llega en el estudio del anterior. Por otra parte --estímase en la sentencia reclamada-- los razonamientos a que se contraen los considerandos V y VI de la resolución recurrida (son dichos considerandos los que se rebaten en

este agravio) "fue hecho a mayor abundamiento, pues - los considerandos anteriores a los mencionados, fundan por sí solos, la sentencia recurrida."

31.- CONCEPTO DE VIOLACION EN CUANTO AL FONDO.

El quejoso reclama contra la violación de garantías consignadas en los artículos 14 y 16 constitucionales por infracción de los artículos 1151-I y 1152-I--III del Código Civil y porque se le molesta en sus derechos sin resolución judicial que se funde en ley.

32.- El contenido de este concepto de violación coincide sustancialmente con el de los agravios--deducidos en apelación contra la sentencia de primer grado.

33.- Primeramente se impugna la interpretación que la Sala sentenciadora presta "a la frase en concepto de propietario". Esta expresión significa, -- para la responsable, que si alguno invoca la prescripción "debe fundarla en un título traslativo de dominio." Calificando el concepto, esta Tercera Sala de la Suprema Corte desecha, por inexacta, semejante aseveración. En efecto, en la parte de la sentencia que el reclamante copia en este punto sin estricta fidelidad, se contiene una proposición particular, concretamente aplicable al negocio que se ventila. Carece por tanto de la universalidad dogmática que se le atribuye.

34.- Es inconcuso, además, que la demanda -- inicial, entre los hechos en que se funda, expresa que (II) "desde el año de mil novecientos once" los predios le fueron donados al actor por su padre, y que (III) --



-8-

"por consiguiente" ha disfrutado respecto de ellos, - de una posesión pacífica, continua y pública. Ahora - bien, la Sala sentenciadora estima que no se causó el agravio correspondiente, porque el actor estaba obliga- do a justificar en autos "la existencia de ese contra- to o acto jurídico" (la donación), y sucumbió en la - prueba de tal extremo, según la prudente estimativa - del inferior. Desde luego se advierte que la autoridad responsable, en el examen de esta cuestión primaria, - se contras a los términos del caso concreto que esta- ba sometido a su decisión; y no yerra al considerar - que, si en la demanda se hizo valer, como causa gene- radora de la posesión y como base de la acción dedu- cida, un hecho específicamente determinado, la carga- de la prueba pesaba sobre el actor, y no habiéndose - comprobado, la sentencia tenía que ser desestimatoria de la demanda.

35.- Continuando el examen de la misma vio- lación, debe observarse que tampoco se incurre en --- error ni en infracción de texto legal cuando se rela- ciona, como lo hace el Tribunal responsable, el con- cepto en el cual se posee la cosa, con el concepto -- por el cual se ha entrado en la posesión de ella. --- Efectivamente, no tiene la posesión (originaria) la - persona que la adquirió (derivativamente) como usu- fructuario, como arrendatario, como custodio. No la - tienen (según una lista ejemplar), respecto de los -- bienes de la mujer, el marido que los administra ni el tutor en cuanto a los bienes del incapacitado; en re-

sumen, el que posee a nombre de otro, o sea por alguno de los conceptos que, por su definición y naturaleza, excluyen el ánimo de poseer para sí y por consecuencia "en concepto de propietario."

36.- La imprescindible conexión que se establece entre los requisitos internos y los elementos formales de la prescripción adquisitiva se pone de manifiesto con sólo advertir la equivalencia que en --- cierto modo admiten los términos "en concepto de dueño" por una parte, y "a título de dueño", por la --- otra. En esta referencia puede citarse a Planas y Casals, Derecho Civil, T. II, núm. 26, pág. 563). Breve mente explica José Rojina Villegas (Apuntes, México, - 1940; T. II; pág. 213): "Como estamos estudiando la - posesión originaria, o sea la que se tiene en concepto de propietario... es evidente que el justo título viene a constituir la posesión originaria... Si falta -- el justo título, ya entonces se trata de una detención, según el Código anterior, o de una posesión derivada, según el Código vigente, que no es útil para la prescripción." Y en el Tomo II, página 92, de su Tratado, Aubry y Rau dejan establecido: "Por ley se reputa que los meros detentadores carecen del "animus sibi habendi" y esta presunción, que se adhiere al origen de la posesión, la acompaña mientras dura."

37.- Mas nada de lo expuesto significa, como lo propone el quejoso al introducir al presente concepto, que la autoridad responsable haya sustentado, como ---



-9-

criterio absoluto, que todo el que invoque la prescripción, "debe fundarla en un título traslativo de dominio", con el significado de titulación perfecta que ampara la propiedad; ni se niega que al lado de la -- usucapción quinquenal se da el instituto de la prescripción extraordinaria, previsto y disciplinado, tal vez con alguna oscuridad, por el legislador, vigente. Las apreciaciones del tribunal no tienen más objeto que -- las cuestiones suscitadas en el litigio generador del acto que se reclama y es evidente que en la misma especie el actor ha "invocado la prescripción" fundada en un título de los que en derecho transmiten el dominio.

38.- En el segundo apartado del concepto que se examina, se involucran las siguientes cuestiones:

(a) El quejoso reproduce los enunciados de su demanda. Pone de relieve nuevamente los elementos reales de la posesión en que se funda. Mas a juicio de la Sala esta reseña es inoperante, porque en ella se omite "el hecho" afirmado en la demanda civil (Punto número 2) como causa de la posesión; esto es, la donación realizada por el dueño de los predios en favor del prescribiente.

(b) Se alude a la prueba testimonial ofrecida por el actor, suficiente a su parecer para comprobar los hechos que relata en la anterior reseña (a), entre los cuales no viene incluida alusión ninguna al hecho en que, según las enunciaciones capitulares de la demanda, tomó origen la posesión. En este punto --

se invoca únicamente el artículo 1151 del Código Civil, cuyos extremos, según el quejoso, debieron tenerse por comprobados. Lo aseverado en este lugar, a juicio de la Sala, no reviste forma de concepto de violación.

(c) El quejoso advierte, con cita del artículo 1152-III del Código Civil que aun los poseedores de mala fe tienen derecho para prescribir. El quejoso conceptúa que "en tales circunstancias y cualquiera que hubiera sido el origen" de su posesión "teniendo ésta más de veinte años y habiendo sido en concepto de propietario, pacífica, continua y pública, ha debido producir necesariamente la prescripción." En apoyo de su tesis, el agraviado cita las siguientes ejecutorias: Tomo XLVIII, página 1891, y Tomo LVIII, página 2805, Semanario Judicial de la Federación. Por estas ejecutorias, según afirma el quejoso, quedó establecido "en forma precisa y clara" lo siguiente: Para que se opere la prescripción no se necesita la existencia de título alguno en favor del que la pretende, pues sería absurdo alegarla por quien es propietario "contadas las formalidades de ley." Basta "simplemente que quien la invoca en su favor haya tenido realmente el ánimo de poseer como dueño." El contenido de este apartado, se analizará en los párrafos subsiguientes:

39.- Por lo que se refiere a la ejecutoria inserta en el tomo XLVIII, página 1891, ha sido, sin duda, inadvertidamente citada por el quejoso. La tesis que se sustenta en ella es aplicable a la especie que se examina, pero en sentido adverso para la preten



-10-

sión quejosa. De este fallo resulta que la carga de la prueba sobre "la cesión o donación" en que se funda el hecho posesorio, incumbe a la persona que hace valer la prescripción, "pues su simple afirmación --- no evidencia el justo título necesario para la prescripción," según el sentido legal de este concepto, - a tenor del artículo 1080 del Código Civil de 1884.

40.- Tampoco sirve a los intereses del --- agraviado el tenor de la ejecutoria visible en el Tomo LVIII, página 2805, del Semanario Judicial. Aquí - mantuvo la Suprema Corte de Justicia, por una parte, - que por justo título no debe entenderse que el título sea "perfecto" ni "legal", porque si así fuere, "la - prescripción sería innecesaria;" y por otra parte, -- confirma la noción positiva de justo título, en el -- sentido de ser uno de los que basten para transferir el dominio, o que fundadamente sea reputado por tal, - siempre en el sentido de "causa de la posesión adquirida". Este sumario examen de las ejecutorias de referencia basta para desvirtuar, en parte fundamental, los conceptos deducidos en la demanda.

41.- En cuanto "al derecho para prescribir", con arreglo a la fracción tercera del artículo 1152, - los bienes que el actor hubiese poseído de mala fe, - la cuestión, en virtud de lo que se deja expuesto, cae de interés práctico por donde su examen se justifique. Rectamente se abstuvo la Sala sentenciadora de analizar los demás agravios, en frente del resultado - a que se llegó al estudiar los méritos del primero; -

debiéndose advertir que la abstención en llevar adelante el examen, no ha motivado, en el juicio de garantías, concepto de violación deducido en forma.

42.- No está por demás, con todo, señalar-- que en las fracciones I y III del artículo 1152 se contemplan, respectivamente, la buena fe (en la primera fracción) la mala fe (en la tercera). Ahora bien, estos elementos, como lo dice la razón natural, se excluyen el uno al otro. Y es claro que en la demanda no se hacen valer acumulativamente, en el sentido de haberse poseído la cosa al mismo tiempo de buena y de mala fe. Tampoco se invocan alternativamente, de modo que pudiesen permutarse entre sí, quedando sujetos a la eventualidad de la prueba y la contraprueba, de manera optativa, no menos que a la elección del Juez. La acción se basó en un hecho concretamente determinado -la posesión adquirida de buena fe- y cualesquiera otras hipótesis quedaron excluidas de la contienda, como no afirmadas en la demanda. No existía para los tribunales de instancia la posibilidad de pronunciarse sobre una posesión ejercitada en forma diversa a como la había afirmado el actor ni sobre las consecuencias jurídicas de un hecho preclusivamente sustraído al objeto del debate.

43.- Los autos acreditan, en efecto, que al hacerse el extracto de la litis, se asentó una proposición del tenor literal siguiente: "En síntesis, --- el actor demanda la prescripción de varios terrenos, por haberlos poseído quieta, continua y públicamente-



-11-

por más de veinte años y el demandado declaró ignorar la posesión que invoca el actor y opuso la excepción de falta de acción, fundada en la cosa juzgada en los términos que se acaban de exponer." (Autos de primera instancia; fojas 20 vuelta). La sucesión demandada -- manifestó su inconformidad con la síntesis hecha por la Secretaría; el Juez mandó hacer la aclaración que se solicita, y el mandamiento quedó evacuado a tenor de una actuación que dice: "El suscrito Secretario... hace constar: que el señor Javier Belmont en el segundo de los hechos de su demanda dice: que desde el año de mil novecientos once, su padre le donó a título -- (h)eneroso, los terrenos..... El albacea, al contestar la demanda.... dice: en el punto de los hechos, que niega el hecho contenido en el número dos de la demanda..." (Autos originales, Cuaderno principal, fojas -- 25). Planteada la litis en los términos que anteceden, quedó excluida del litigio toda cuestión versante sobre la prescripción que hubiese podido ganarse en el concepto que se postula en el amparo, mediante la posesión sin título y de mala fe. El tribunal responsable no ha infringido por consecuencia la fracción III del artículo 1151 del Código Civil.

44.- El quejoso mantiene, por el tercer apartado de este concepto de violación, que nunca afirmó el hecho de haber adquirido el dominio de los predios por la donación hecha a favor del mismo. "Si tal hubiere creído", según expresa, "no habría invocado la prescripción." Pero en seguida expone que, si adujo -

que su padre le había donado los terrenos, fue para explicar que su posesión no era violenta, "sino de buena fe." Tampoco ofrece interés, desde el punto de vista constitucional, la aseveración que se contiene en este lugar. Al introducirse la acción, como base de la misma, fue afirmada la donación realizada a favor del demandante.

45.- En el último apartado de la demanda se alude a la prueba testimonial. No se cita ninguna ley infringida. Menciónase a cuatro de los testigos que presentó la actora, y a este particular el quejoso -- considera que, si en concepto del Juzgado fueron idóneos y mereció fe su dicho, debió tenerse por probada la resolución, por parte del padre del agraviado, de donarle los predios que se cuestionan, aun cuando no se llegó a otorgar la escritura respectiva. No tuvo razón el Juez de Primera Instancia para estimar que las declaraciones testimoniales, a este respecto, "son vagas", porque "no siendo abogados" --los testigos-- "y habiendo transcurrido más de veinte años después de que se hizo la donación," no era posible que conservaran los detalles de la misma ni que usaran de tecnicismo jurídico. Sus declaraciones bastan indudablemente para acreditar que Domingo Belmont "resolvió desprenderse de los inmuebles" "donándomelos" (al peticionario) "para compensarme de los múltiples servicios que le presté." Como consecuencia de lo expuesto --agrega el quejoso-- "aun dentro del criterio de la autori-



-12-

dad responsable se hubiere consumado la prescripción, pues existió el título aparente que ella exige," para dar origen al derecho del poseedor. Sobre estas premisas el quejoso concluye que la sentencia reclamada, "desde cualquier punto de vista" infringe los artículos 1151, en su fracción I, así como el 1152, en sus fracciones I y III, ambos preceptos del Código Civil, y viola en su perjuicio la garantía de los artículos 14 y 16 constitucionales.

46.- Evaluando este concepto de violación, la Tercera Sala no advierte cuáles sean las normas positivas ni de sana crítica que la responsable haya quebrantado al desestimar la prueba testimonial. Efectivamente, el Juez a quo reputa por idóneos a los testigos presentados por el actor y les presta fe, pero no se considera vinculado por las respectivas declaraciones, en ejercicio de su prudente arbitrio, en cuanto al hecho que el mismo Juez tiene por fundamental en la especie; es a saber, que Domingo Belmont hubiera donado a su hijo los predios que el último pretende haber adquirido por prescripción. Esto no importa infracción de las reglas normativas del valor de los testimonios, tal como lo resuelve, al examinar el correspondiente agravio, la autoridad responsable. Sin sustituirse a los tribunales de instancia, la Sala que pronuncia la presente ejecutoria, examinando el contenido de los testimonios de que se trata, considera -- que al desestimarlos con referencia al hecho de la donación afirmada en ambas instancias, no menos que en este amparo, el Juez a quo no rebasa los límites del-

arbitrio que la ley confiere a su prudencia y sagacidad, y en consecuencia, ni aquél infringió algún texto legal (en todo caso, no citado por el quejoso), ni el Tribunal de alzada viola, en esta referencia, por infracción de ley, garantías constitucionales.

47.- En lo que respecta a la infracción de ley material, aun a riesgo de incurrir en inevitables repeticiones, supuesto que a ello obligan las producidos en la demanda de amparo, conviene aludir en esta ejecutoria a las "presunciones" que, según conceptúa el quejoso, obligaban al sentenciador responsable, que sin embargo se desentendió de ellas.

48.- Por el artículo 806 del Código Civil - se llama poseedor de buena fe al que entra en la posesión por virtud de un título suficiente para darle derecho a poseer la cosa. El mismo nombre recibe el poseedor que ignora los vicios de su título y por título se entiende la causa generadora de la posesión. El artículo 807 dispone que la buena fe se presume siempre. Ahora bien, del tenor de este precepto el quejoso infiere, a tenor de lo que alega en el amparo que también haya de presumirse la existencia del título en que la posesión toma origen. La Tercera Sala no abraza ese parecer. Si fuere válido, no podrían coexistir, como coexisten, las reglas que respectivamente registran los artículos 806 y 1954 del Código Español. El primero establece, como el Código mexicano, que la buena fe se presume, mientras no se pruebe lo contrario; y el segundo dice que el justo título no se presume nunca, por lo que siempre deberá probarse.

57

-13-



Y si alguna contradicción pudiera existir entre el artículo 1954 y otros del ordenamiento extranjero, la doctrina se manifiesta en el sentido de prestar validez absoluta a la regla consignada en este precepto, sin que por ello padeciere menoscabo la que se consigna en el artículo 807; esto es, la buena fe se presume siempre, mas el justo título no se presume nunca. Sobre este particular, Planas y Casals (Derecho Civil Español y Foral; Tomo I; página 25) se expresa como sigue: "Ya hemos dicho que este justo título no se presume nunca, sino que debe probarse, al revés de lo que acontece con la buena fe. No se presume el justo título en tanto que no se justifique su existencia. - Esto es lógico: el justo título es un acto material, es un hecho y debe ser objeto de prueba como lo son todas las cuestiones de esta clase." A esta observación debe agregarse que en el mismo concepto abunda el derecho tradicional (Pothier; Oeuvres; T. IX; página 352; Núm. 98).

49.- Por el derecho mexicano, aun suponiendo que la especie se sustraiga a la regla del artículo 11 del Código Civil, la presunción de existir el título traslativo de dominio no podrá subsumirse en la presunción que la ley establece tocante a la buena fe. La doctrina francesa (Planhol; Traité; T. I; página 783; Núm. 2294), con referencia a los frutos de la cosa poseída, tiene resuelto que, si el poseedor quiere hacerlos suyos, sobre él recae la carga de la prueba respecto al título de su posesión, y que de

bería incumbirle --además-- la de su buena fe; pero -- se le dispensa de probar la última por aplicación --- analógica de la regla que gobierna en materia de usucapión, de suerte que su buena fe se presume. La situación que se analiza en este lugar se presenta, en --- igualdad de términos, en el caso del artículo 810 del Código mexicano. Según este precepto, "el poseedor de buena fe que haya adquirido la posesión por título -- traslativo de dominio tiene los derechos siguientes:--

I.- El de hacer suyos los frutos percibidos..." Quiere decir que, si la buena fe, por una parte, y por la otra, el título traslativo de dominio se requieren -- acumulativamente, como elementos que deben concurrir juntos para generar las consecuencias previstas en -- esta norma, no podrán englobarse, desde el punto de -- vista de la prueba. La presunción del elemento personal (fides) no arrastra ni lleva implícita la presunción del elemento formal que estriba en la concurrente existencia de un título que baste para traspasar el -- dominio sobre la cosa. Establecida por legal presunción la buena fe, la prueba sobre la existencia del -- título continuará pesando sobre el actor.

50.- Válida en principio legal la regla que se deja comentada, su rigor se impone irresistiblemente en el caso concreto, porque la pretensión actora-- se funda, entre otros hechos constitutivos, sobre la existencia de un título de los que transfieren en de -- recho la propiedad; y la sentencia reclamada a su vez reposa, totalmente, en el fracaso de la prueba testimonial ofrecida y administrada en autos para justifi-



58

car ese hecho fundatorio de la demanda. La donación, afirmada como acto generador del hecho posesorio, es un contrato literal. La presunción de la ley autoriza a presumir que el peticionario ignoraba la ineficacia de ese contrato, celebrado oralmente, para transmitir el dominio. Mas la prueba testimonial ofrecida para probar la existencia del título como "negotium" - no como "instrumental") no realizó el objeto que perseguía.

51.- Arguyendo contra los motivos de la sentencia reclamada, el quejoso mantiene que el ánimo, - el propósito de disfrutar de los predios como si fueran propios una vez que se habían establecido el tiempo y por legal presunción la buena fe, debieron bastar al sentenciador para tener por consumada la usucapión y revocar la sentencia de primer grado, porque la material tenencia de la cosa, los actos de uso y disfrute de la misma llenan el requisito de haber sido la posesión "en concepto de propietario". De esta suerte, dentro de la terminología invocada por el quejoso, el ánimo, elemento interno inconciliable con la posesión precaria, se confunde con el corpus, así como se identifican el poder ejercitado sobre los predios --- (actos de posesión que se realizaron durante el término de la misma), con el requisito de poseer la cosa en concepto de dueño. Sobre este punto reposan, substancialmente, los razonamientos del agraviado; mas la Sala no podría adoptar este criterio sin apartarse -- del texto legal expreso. No basta con ejecutar actos-

de dominio, aun suponiéndolos inequívocos, para adquirir por medio de la prescripción, en los términos del artículo 806 del Código Civil.

52.- El concepto de propietario extiéndese, retrospectivamente, al origen de la posesión, a la entrada en ella; y no parece necesario insistir en que al iniciarse aquélla, en la especie, ninguno de los actos de posesión que invoca el actor, ofreciendo y rindiendo prueba sobre los mismos, se había realizado aún, ni era posible que se hubiera realizado. Desde este punto de vista, no yerra la autoridad responsable ni viola garantías individuales al no tener por comprobado el primero de los requisitos que señala el artículo 1151 del Código Civil, a tenor de su fracción I, que a la letra dice: "La posesión necesaria para prescribir, debe ser en concepto de propietario," porque este artículo se relaciona inmediatamente con el artículo 806 del mismo Ordenamiento, según el cual, sólo es poseedor de buena fe "el que entra en la posesión en virtud de un título suficiente para darle derecho de poseer," o bien el que ignora los vicios de su título. Los actos de posesión después realizados, no satisfacen la exigencia legal. El título suficiente precisa para entrar en la posesión.

53.- En número anterior de esta ejecutoria se ha querido poner de resalto la equivalencia que existe entre expresiones "en concepto" y "a título" de dueño. Ella resulta del lenguaje de la doctrina que se dejó invocada (número 36), así como del léxico generalmente usitado en el comercio jurídico, y aun--



-15-

la propia ley la consagra. Si los artículos 826 y 827 del Código Civil expresan, "concepto" en cambio el artículo 1139, remitiéndose a uno y otro artículos, dice "a título de..." y en consecuencia atribuye, a la primera expresión y a la última, el mismo significado. Poseer una cosa en concepto de dueño equivale a poseerla a título de tal. Esto quiere decir, en su acepción directa, "causa o motivo." El legislador alude por tanto a la "causa" de la posesión, cuando enuncia la fórmula "en concepto de propietario" y contempla un título exento de precariedad. Así lo explica Planiol (Traité; T. I, página 778; número 2276) sin discrepancia con otros autores, manteniendo una tesis que, al ser desvirtuada, socavaría los fundamentos del instituto, tanto como los fines económicos y sociales que está destinado a satisfacer.

54.- La precariedad no se concibe como un vicio de la posesión originaria, sino como "algo más grave;" es a saber, "como total ausencia de posesión" (originaria). El poseedor a título precario (derivativo) o mero detentador, es evidente que no posee en concepto de propietario y para él "la usucapio no se realizó nunca, cualquiera que sea el lapso de tiempo que dure la posesión," según la regla que dice: "nadie prescribe contra su título" (Opus cit. Tomo I; página 921; número 2649). Todo lo cual halla plena confirmación en el texto de nuestra ley vigente: en el artículo 826 del Código Civil, piedra angular del régimen de la prescripción adquisitiva, se contiene una

regla que no admite diversidad de interpretaciones: -
"Sólo la posesión que se adquiere y disfruta en concep-
to de dueño de la cosa poseída --dice el texto legal--
puede producir la prescripción." En consecuencia, la -
ejecutoria que, aun teniendo por comprobado el hecho -
posesorio, desestimó la demanda por incompresión "del
primer requisito que la ley señala," o sea el concepto
de dueño, no infringe la letra de la ley ni su inter--
pretación jurídica, o principio alguno de derecho, y -
no es violatoria de garantías.

55.- La sucesión de Domingo Belmont, terce--
ro perjudicado en el presente juicio, para demostrar -
la improcedencia de los conceptos de violación deduci-
dos por el quejoso, hace hincapié insistentemente so--
bre el resultado de una prueba documental, rendida en-
primera instancia (número 9 de la presente ejecutoria).
Se deja asentado que esta prueba, la cual consiste en-
diversas constancias deducidas del juicio de interdic-
ción de Domingo Belmont, fue propuesta por la parte --
del demandado, cuando ya había fenecido la dilación, -
con apoyo en los artículos 98 y 307 del Código de Pro-
cedimientos Civiles, y recibida, el Juez la mandó ----
agregar a los autos. Contra el auto que recayó al ofre-
cimiento de dicha prueba, el actor interpuso, según --
aparece de autos, revocación; pero no consta que el --
recurso se haya admitido.

56.- De las constancias que se mencionan apa-
rece lo que sigue: en el juicio de interdicción, aca--
tando lo dispuesto por el Juez Pupilar, la actora en -
dicho juicio presentó inventario de los bienes que apa



-16-

recían inscritos en el Registro Público de la Propiedad a favor del incapacitado, Domingo Belmont, y en tal inventario se incluyen los cinco predios especificados en la demanda sobre prescripción adquisitiva. La fecha del escrito de que se hace mérito es la del día ocho de noviembre de mil novecientos treinta y cinco. En comparecencia del día doce de noviembre del mismo año, Javier Belmont aceptó el cargo de tutor interino de Domingo Belmont y protestó su fiel y legal desempeño. El propio Javier Belmont, en escrito de fecha diez de febrero de mil novecientos treinta y seis, como tutor interino del incapacitado, ocurrió al Juez Pupilar para manifestar que el mismo incapacitado había fallecido el día seis anterior, y en este curso se contiene, aparte otras enunciaciones, una que dice a la letra: "Que también hago del conocimiento de usted que en mi carácter de tutor no he administrado ningunos bienes propios del incapacitado, pues los que le corresponden por sus gananciales en la testamentaria de su esposo... están indivisos y son administrados por el albacea in-testamentario; y los terrenos que adquirió por herencia de sus hermanos Juan Manuel y Fernando Belmont están improductivos y yo he ejecutado actos de mera protección a la persona del mismo y cuidado de dichos bienes, pagando las contribuciones correspondientes." (Autos originales; cuaderno de pruebas del demandado; f. 10 y siguientes). Por último, los autos acreditan que los cinco predios involucrados en la contienda, según certificación expe-

dida por el Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal (fojas 3), fueron adquiridos por Domingo Belmont mediante escritura de adjudicación y partición de bienes de Juan Manuel Belmont, otorgada el día quince de noviembre de mil ochocientos noventa y siete.

57.- La Sala no considera necesario alargar-- se al examen de la cuestión que suscita, a este respecto, el tercero perjudicado y se abstiene de considerar los méritos de la prueba que se menciona, para establecer por ese medio, ora el reconocimiento de propiedad en favor de otro, ora la precariedad de la posesión sobre la cual se basa, en el juicio generador del acto reclamado, la pretensión actora: el procedente análisis de los conceptos deducidos por el quejoso-- bastan para fundar la denegación del amparo, por incomprobación de las violaciones reclamadas.

58.- Por lo expuesto, contrariamente a lo pedido por el Agente del Ministerio Público y con fundamento además de los artículos 103-I y 107-I, II y VIII de la Constitución General; 44, 158-II y 190 de la Ley Reglamentaria del juicio de garantías y 26-II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Javier Belmont contra la ejecutoria que pronunció la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios Federal, el día veintitrés de septiembre de mil novecientos cuarenta -

-17-



Cotejado con el
proyecto aproba-
do por el C. Mi-
nistro Emilio -
Pardo Aspe.

y uno, en el toca a la apelación contra sentencia de-
finitiva del Juez Primero de lo Civil de esta Capital,
por Ministerio de Ley, en el juicio ordinario civil -
promovido por Javier Belmont frente al albacea de la
sucesión de Domingo Belmont, sobre declaración de ha-
ber adquirido por prescripción diversos inmuebles.

SEGUNDO.- Notifíquese; envíese testimonio de-
esta resolución a la autoridad señalada como respon-
sable, devolviéndole los autos correspondientes a este
juicio de amparo y en su oportunidad, archívese el --
expediente.

Así lo resolvió la Tercera Sala de la Suprema-
Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cin-
co votos de los CC. Ministros Licenciados Emilio Par-
do Aspe, Carlos I. Meléndez, Agustín Mercado Alarcón,
Nicéforo Guerrero y Presidente Hilario Medina.

Firman los CC. Presidente y Ministros, con el
Secretario que autoriza.

PRESIDENTE.

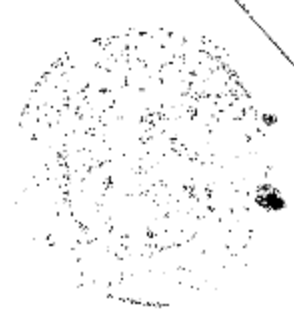
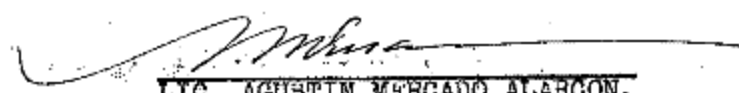
Hilario Medina
LIC. HILARIO MEDINA.

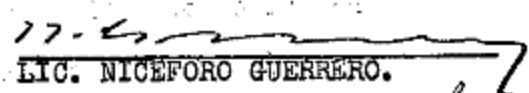
MINISTROS.

Emilio Pardo Aspe
LIC. EMILIO PARDO ASPE.

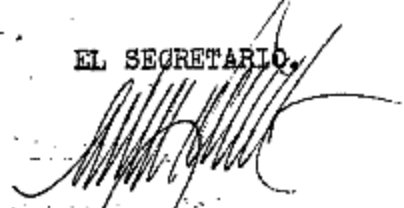
Carlos I. Meléndez
LIC. CARLOS I. MELENDEZ.

Vo. Bo.



LIC. AGUSTIN MERCADO ALARCON.

17-4

LIC. NICEFORO GUERRERO.

EL SECRETARIO.


LIC. ARTURO PUENTE Y F.

MAY 11 1944 por lista de la misma fecha se,
notificó la resolución anterior, a los interesados y
al Ministerio Público Federal.

